

EL DESAFIO DE LOS SINDICATOS

El martes 19 sucedió en Francia la huelga nacional, o general, acompañada de manifestaciones, en las que se planteaba el descontento sindical frente a las medidas económicas del gobierno, que, según el sector obrero, favorecen a la industria y el gran capital. Una semántica de guerra disfraza la realidad de los hechos. El gobierno indica que sólo un 25 por ciento de la población activa siguió las consignas de huelga lanzadas por los sindicatos; las fuentes sindicales dicen que el paro fue superior al 50 por 100. La manifestación celebrada en París sufre de la misma oscuridad: mientras la policía evalúa en 60.000 el número de manifestantes, los sindicatos dicen que fueron 400.000. Parece que la cifra más verosímil sea la que dan los periódicos sin compromiso político: unas 300.000 personas. Cifra importante que supone que uno de cada diez o quince habitantes de la región parisense (contando todas las edades y situaciones) ha participado en el desfile contra la política económica.

Las huelgas, al comenzar la semana siguiente, parecen haber crecido en gran parte de los sectores más duramente alcanzados. Parece que el malestar social vaya a tomar una forma crónica y permanente, en lugar de plantearse en situaciones agudas, como las pasadas. Corresponde esta situación a la que parece ser nueva tónica del gobierno: una mayor tendencia a la negociación, en lugar de la negativa absoluta que había precedido a la jornada del día 19 de noviembre, negativa especialmente dura por parte del ministro del Interior, que había hecho intervenir a la policía para romper algunas huelgas, acusándolas de «políticas». En la víspera del 19, el primer ministro había anunciado por radio y televisión que el gobierno y el patronato estaban dispuestos a responder de una manera afirmativa «a todo aquello que concierna a la mejora del nivel de vida que sea compatible con la situación económica», pero la política económica del gobierno «no es negociable», y el gobierno «no se dejará influir por los viejos demonios de la división y de la renuncia». Los sin-



Obreros de la imprenta La Néogravure, declarada en quiebra, ocupan los talleres, impidiendo la aparición de revistas como «Elle» y «Paris-Match».

dicatos sostienen que ciertas restricciones en el alza de los salarios y ciertas medidas de ahorro de gastos no son necesarias para la salvación económica del país al enfrentarse a la doble crisis,

nacional y mundial, que les amenaza, sino solamente en función de la defensa de los grandes intereses patronales. La política de austeridad «sirve para enmascarar la privatización de los servicios públicos y la sumisión de toda la economía a los intereses del gran capital», dice el partido socialista unificado, para el que el gobierno, «a la vez, incapaz e hipócrita», debe resolverse a proseguir las negociaciones necesarias, sin lo cual «se aproximará más a la fecha de su caída», en la que será reemplazado por un gobierno de las izquierdas. El sindicato más numeroso, la CGT —con mayoría comunista—, dice que la política económica del gobierno «no aporta ningún remedio ni a la inflación, ni al alza de los precios, ni al paro; una política que sacrifica los intereses de los trabajadores a la voracidad de las compañías privadas». La Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT) dice que «el gobierno no ve más que un medio para combatir la inflación: aumentar el paro obrero en el sector privado, al mismo tiempo que cierra la puerta a las contrataciones necesarias en el sector público: quiere hacernos creer que la salud de la economía y el pleno empleo son incompatibles».

El semanario del partido socialista, «L'Unité», examina las tres hipótesis en que se puede desarrollar la situación actual. Una es que la intransigencia del gobierno haga ceder a los sindicatos y suponga una reanudación del trabajo: el descontento no cederá y la situación producirá una serie continua de huelgas esporádicas, «creando una situación de agitación que será aún más difícil de



Uno de cada diez o quince habitantes de la región parisense (contando todas las edades y situaciones) ha participado en la manifestación contra la política económica del gobierno.



En la manifestación monstruo del martes 19 se exhibieron pancartas de todos los sindicatos. (En la foto, los obreros, frente a la sede del CNPF, patronato francés.)

controlar por parte del gobierno». La segunda hipótesis es la de que el gobierno y el patronato se decidan a negociar, y esa es la hipótesis optimista, pero no podrá realizarse realmente si el gobierno no modifica, al menos en parte, su política general. La tercera hipótesis es la de que el gobierno no quiera ceder ni negociar, como en la hipótesis primera, pero en ésta se examina la posibilidad de

que en lugar de inclinarse hacia una situación crónica de protesta, las fuerzas sindicales prosigan su acción. Es la situación más peligrosa. Será entonces el gobierno el que haya «politizado» las huelgas, y se encontrará en una situación insostenible.

La cuestión de la «politización» de las huelgas es puramente académica. Toda huelga es política desde el momento en que las so-

luciones dependen de los gobiernos y de la política general de éstos, de la misma forma que toda política es fundamentalmente una ordenación económica. El ideal sindicalista antiguo de que las huelgas estuvieran ajenas a toda política se basaba exclusivamente en los sistemas liberales, por los cuales obreros y patronato habían de resolver mutuamente sus problemas, cuenta tenida de la no

intervención de los gobiernos en las relaciones sociales. No ha pasado nunca de ser un ideal, y en esta época, el ideal es más lejano que nunca, puesto que los gobiernos, en todo el mundo, controlan estrechamente las fuentes de producción, tanto las del capital como las del trabajo. El Estado, por su parte, forma parte del patronato desde el momento en que contrata trabajadores para los sectores públicos, y los gobiernos, como administradores de esa contratación estatal, tienen que enfrentarse a las reivindicaciones.

La posición general de la izquierda, a pesar de las divisiones interiores que está sufriendo en estos días, es la de que debería emprenderse una gran negociación global entre el patronato (con el Estado) y los sindicatos, que abarcara a todas las formas de trabajo y a todos los sectores. Una especie de pacto social. Esta negociación tiene un precedente, el de mayo de 1968, cuando la profunda revolución juvenil penetró en los sindicatos y se convirtió en huelga general. Las negociaciones se llevaron adelante en el despacho del primer ministro, y los sindicatos aceptaron una mejora general de salarios, de atenciones sociales y de reducción de horas de trabajo. Pero muchos sectores laborales repudiaron (aunque finalmente lo tuvieron que aceptar) el pacto de sus dirigentes, mediante una aguda calificación de la situación: en unos meses o en un año, la subida de precios enjugaría en la inflación las ventajas obtenidas. No habían participado en la lucha por unos francos más, sino por una ordenación de las relaciones entre el capital y el trabajo que tuviesen un carácter permanente y supusieran la participación real de los trabajadores en los beneficios, en la administración de las empresas y en su gestión. De Gaulle —y luego, Pompidou— hicieron, en efecto, un cierto remedo de participación, que únicamente se quedó en el vocablo.

El enfrentamiento actual está basado en las experiencias anteriores, y lo que se pide ahora es una negociación que conduzca a la socialización de intereses que ahora están en manos privadas. Es la única fórmula, dicen los sindicatos, de que las cargas de la crisis económica sean reparadas.

Pero es indudable que el gobierno actual, la mayoría actual de la Asamblea, que responde a una derecha, no es capaz de llevar las negociaciones a este terreno. La situación requeriría unas elecciones generales, de las que saldría —creen los sindicatos— una mayoría de izquierda, que podría aplicar sus programas de socialización y ahorrar a la generalidad del país los horrores de la crisis que se avecina. ■